

La configuración espacial de Urabá en cinco décadas

MELINA LOMBANA REYES

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia

mlombanar@gmail.com

**Spatial configuration in Urabá
through five decades**

ESPACIALIDAD, POLÍTICA Y ACUMULACIÓN DE CAPITAL

Resumen

El presente artículo pretende dar cuenta de los procesos que permitieron la configuración del Urabá antioqueño como nueva espacialidad capitalista en Colombia a partir de la segunda mitad del siglo XX, y el papel fundamental jugado en este proceso por las dinámicas de acumulación por desposesión, acompañadas y permitidas, desde la década de los ochenta, por la expansión y consolidación del paramilitarismo, afirmando así el carácter criminal de las lógicas capitalistas en esta región. Procesos que tuvieron como correlato la expulsión violenta del campesinado de sus tierras, el asesinato, la homogenización del panorama político y la flexibilización violenta del trabajo, cuya funcionalidad a las lógicas de acumulación de capital no solo permitieron la afirmación regional como espacialidad capitalista, sino también la apertura de nuevos frentes de acumulación, como la producción de “biocombustibles” y el narcotráfico.

Se analizarán las implicaciones de lo anterior en la estructuración del régimen político local, así como en la configuración del panorama de fuerzas políticas, la reorganización de la geografía y la configuración del modelo económico regional.

Palabras clave: espacialidad capitalista, Urabá, acumulación por desposesión, paramilitarismo, acumulación de capital.

Abstract

This article seeks to explain the processes that allowed the configuration of Urabá (Antioquia) as a new capitalist spaciality in Colombia as in the second half of the XX century. It also refers to the key role played in this process by the accumulation by dispossession dynamics, provided by the expansion and consolidation of the para-militarism since the 80's decade, thereby demonstrating the criminal nature of the capitalist logics of the region. Processes which had their correlation in the violent expulsion of peasantry, murder, homogenization of political landscape and the violent flexibilization of labor, and whose functionality to the logics of capital accumulation allowed not only the regional affirmation as a capitalist spaciality, but also the opening to new fronts of accumulation, like the 'biofuel' production and the drug trafficking.

Said implications are analyzed as in the composition of the local political regime, as well as in the configuration of political forces landscape, the reorganization of geography and the configuration of the regional economic model.

Key words: spaces of capital, Urabá, accumulation by dispossession, paramilitarism, capital accumulation.

Introducción

El espacio geográfico no es una realidad neutra o vaciada de contenido; por el contrario, es el producto de la espacialización de las relaciones sociales, de las relaciones de poder, de cooperación y de conflicto que se presentan al interior de marcos sociales determinados¹. Como lo afirma Neil Smith, la relatividad del espacio social está definida por las relaciones particulares presentes en una sociedad determinada (Smith, 2006).

La modelación social de la geografía, sin embargo, no simplemente responde al conjunto de acciones y relaciones sociales que toman lugar en determinada geografía. Este proceso, como se dijo anteriormente, responde a relaciones de poder, de gestión y de dominio que dependen de las capacidades, recursos y respaldo con las que cuentan actores o grupos de actores que interactúan en el territorio. A consecuencia de ello, la capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiarse del territorio por parte de los actores es desigual (Montaña y Delgado, 1998:123).

En este sentido, es coherente pensar que las relaciones de clase y el carácter de las relaciones productivas pueden contribuir a producir el espacio, a configurar territorios.

Aún reconociendo lo anterior, el presente artículo delimita su alcance preguntándose por la manera en como las relaciones de producción y las lógicas de acumulación de capital contribuyen –pero no agotan– los procesos de producción social del espacio, entendiendo que, como afirmó Marx, “la acumulación de capital se produce en un contexto geográfico y a su vez produce tipos específicos de estructuras geográficas” (Harvey, 2007:335).

Producción espacial avocada a la acumulación de capital, que en el Urabá antioqueño se inserta en el marco de procesos sociales y políticos que la desbordan y con los cuales establece relaciones contradictorias y no siempre concordantes. En este sentido, se busca en el presente artículo reconstruir los procesos económicos, políticos y del conflicto armado que contribuyen a establecer a Urabá como una nueva espacialidad capitalista a partir de la segunda mitad del siglo pasado.

Aunque se reconoce que las configuraciones geográficas, territoriales y espaciales no son sólo el resultado de los procesos de acumulación de capital y de la imposición de los intereses de las clases dominantes, el presente artículo no abordará los procesos, si pudiéramos decir, contrahegemónicos que se agencian desde sectores sociales populares y

1. Al respecto ver: Montaña y Delgado (1998, 120).

desde los procesos de resistencia social y política para la configuración espacial y territorial de Urabá, ya que esto desborda los alcances de la investigación planteada.

Tomando como base lo anterior, propondré en este artículo una lectura la transformación de la realidad del Urabá antioqueño de acuerdo a las implicaciones que para la región trajo su articulación a las dinámicas de acumulación de capital y, en últimas, su configuración como nueva espacialidad capitalista en Colombia, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Implicaciones que no solo se manifestarán en la reorganización de la geografía regional, sino también en la configuración de las relaciones políticas, sociales y, por supuesto, económicas de Urabá.

Como elemento explicativo fundamental para la comprensión de este proceso, debe atenderse al papel desempeñado por las dinámicas de acumulación por desposesión teorizadas por David Harvey, en tanto permitieron la liberación de activos a bajos costos, que después fueron apropiados por el capital para llevarlos a usos rentables.

La acumulación por desposesión se entiende en el marco de la vigencia contemporánea de algunos de los mecanismos de la acumulación primitiva en los que insistió Marx para garantizar la continuidad de los procesos de reproducción ampliada del capital, tales como:

[...] la mercantilización y la privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de las poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derechos de propiedad en derechos de propiedad privados; la supresión del acceso a bienes comunales; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de fuerzas alternativas de producción y de consumo. (Harvey, 2003:116)

De acuerdo a lo anterior, estos mecanismos de acumulación primitiva, para usar los términos de Marx, son ideados para permitir el acceso a materias primas (trabajo, tierra) a bajo costo que permitan darle un uso rentable capitales que no cuentan con opciones rentables de inversión. Así,

[...] para mantener abiertas las oportunidades rentables es tan importante el acceso a *inputs* más baratos como el acceso a nuevos mercados, de lo que se desprende la necesidad de obligar a los territorios no capitalistas no solo a comerciar (lo que efectivamente ayuda), sino también a permitir la inversión de capital en operaciones rentables utilizando fuerza de trabajo, materias primas, tierras, etc., más baratos. La tendencialidad de la lógica capitalista de poder no apunta a mantener determinados territorios al margen del desarrollo capitalista, sino todo lo contrario. (ídem, 113)

En este sentido se explica la incorporación de territorios como Urabá, anteriormente aislados de las dinámicas nacionales, que justamente se integran a partir del desarrollo de una economía capitalista regional centrada en el cultivo de banano.

Lo anterior implica que la reproducción y sostenimiento de las dinámicas de acumulación propias del modo de producción capitalista hace uso, y de hecho requiere, de la incorporación de nuevas territorialidades a su lógica, en pos de posibilitar su existencia como sistema económico imperante. En este sentido, la incorporación de nuevos territorios y regiones a las dinámicas de acumulación de capital hacen parte de las soluciones espacio-temporales que debe buscar el capitalismo para superar las crisis inherentes a su desarrollo, derivadas de la sobreacumulación de capital (Harvey, 2007:113).

Es importante resaltar el peso que le asigna Harvey al papel del Estado en la lógica de la acumulación por desposesión, en tanto que este “con su monopolio de la violencia, y su definición de la legalidad, desempeña un papel decisivo en el respaldo y promoción de estos procesos” (Harvey, 2003:115). Ejemplo de ello es el sesgo militarista del accionar estatal en la década de los sesenta, haciendo caso omiso de las difíciles condiciones de vida y trabajo de la población de Urabá; el apoyo y la aquiescencia con el paramilitarismo; y todas las acciones encaminadas a legalizar el despojo de tierras a través de la financiación de proyectos económicos directamente agenciados por paramilitares en tierras que previamente robaron al campesinado.

De acuerdo a lo anterior, la expulsión violenta del campesinado de sus tierras, la posterior incorporación de las mismas como factor de producción a la agroindustria bananera y de los biocombustibles, y la proletarianización de la población despojada de sus medios de vida y de producción, son elementos transversales a la configuración y consolidación del modelo económico regional de Urabá, basado en la capitalización de la tierra, el desarrollo de la agroindustria y su vocación hacia los mercados internacionales.

Sin embargo, la configuración de Urabá como espacialidad capitalista estará atravesada por un sinnúmero de conflictos, que pondrán en entredicho la estabilidad y viabilidad de este proceso. Las luchas populares, la organización del trabajo a través del sindicalismo y la confrontación armada serán los frentes desde los cuales se enfrentará la hegemonía de las lógicas del capital en la región. A esto, el capital bananero y los terratenientes ganaderos responderán con la conformación y financiación de grupos paramilitares, que a través del exterminio violento de la izquierda en Urabá, la flexibilización del trabajo y la

homogenización del panorama político, garantizaran las condiciones de “estabilidad” necesarias a las dinámicas de producción. Este proceso llevará a la imbricación orgánica de los circuitos de acumulación legales e ilegales, y, con ello, a la apertura de nuevos frentes de acumulación como la producción de biocombustibles y el narcotráfico.

Con el propósito de recoger todos estos procesos, la exposición está planteada en tres momentos. El primero busca explorar las implicaciones territoriales, así como las configuraciones sociales, políticas y económicas que trajo para Urabá el arribo de la lógica de producción y acumulación de capital, materializada en el desarrollo de la agroindustria bananera en cabeza de la multinacional United Fruit Company. Se relatará cómo, en este período, se empezaron a conformar las primeras organizaciones obreras y populares que buscaban hacerle frente a las condiciones de vida y trabajo impuestas por el cultivo de banano. Igualmente, se destacará la importancia de los métodos de acumulación por desposesión y violencia en la consolidación de las dinámicas de producción de capital.

En un segundo momento, se abarcará el período 1980-1988, caracterizado por un avance de los movimientos políticos y sociales de izquierda en la región, lo que permitirá poner en entredicho la hegemonía de las lógicas de acumulación en la región, así como la continuidad del desarrollo de las mismas. En este proceso serán centrales las acciones de las organizaciones de invasores de tierras, de los diversos sindicatos, el apoyo ofrecido por las FARC y el EPL a estas organizaciones en el desarrollo de sus luchas, y la consolidación de la Unión Patriótica como fuerza política dominante en la región.

En el tercer acápite, que recoge el período 1988-2010, se describirá cómo el capital bananero y los terratenientes ganaderos harán frente a esta situación mediante la conformación de estructuras paramilitares – también financiadas por los empresarios de la droga– como medio para garantizar el desarrollo de los procesos de producción y acumulación de capital, así como la continuidad de la región como espacialidad capitalista². En este período se resaltarán también las implicaciones de lo anterior, primero, en la reconfiguración del régimen político local, basado en la cooptación de las instituciones del Estado por las estructuras paramilitares y mafiosas, y la homogenización violenta del panorama de fuerzas políticas; y segundo, en la configuración de nuevos frentes

2. *Verdad Abierta*, “El dinero del banano sirvió para financiar la guerra”, febrero 16 de 2010, y “Raúl Jazbún habla de los ‘paras’ y los negocios del banano y la palma”, junio 3 de 2010.

de acumulación a partir de la imbricación de lógicas y métodos legales e ilegales encaminados a la producción y acumulación de capital.

Lo que se conoce generalmente como Urabá abarca territorios de tres departamentos vecinos: Córdoba, Antioquia y Chocó. Sin embargo, para los propósitos de este trabajo, solo serán abordados los procesos relativos al Urabá antioqueño.

La llegada del capital a la región 1960-1980

Reconfiguración económica y reordenamiento geográfico

Las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX representaron para Colombia cambios importantes en la configuración de la economía nacional. Los circuitos de acumulación de capital se ampliaron de la zona andina a regiones de colonización reciente, como la Orinoquia y Urabá. Igualmente, a lo largo de la década de los sesenta, a la par que en el nivel nacional se adelantaban procesos de industrialización bajo el modelo ISI³, se promovió el crecimiento del sector exportador, particularmente desde la agricultura comercial.

Lo anterior tuvo como consecuencia la configuración de nuevas espacialidades regionales de acuerdo a las dinámicas y necesidades de producción y acumulación de capital. Este proceso implica la incorporación de espacios geográficos y territoriales a las dinámicas de producción y acumulación de capital, y su reconfiguración a partir de las necesidades que estos procesos plantean para su realización. Sin embargo, su comprensión no debe reducirse a su componente geográfico y territorial. Por el contrario, la producción de espacialidades necesariamente acarrea la reconfiguración de las relaciones sociales, políticas y económicas de un núcleo social determinado y, por tanto, repercute en los ordenes sociales preexistentes.

Podría decirse que Urabá empezó a configurarse como espacialidad capitalista a partir de los años sesenta, momento en el que arribó a la región el capital transnacional en cabeza de la Frutera Sevilla, filial para Colombia de la empresa estadounidense United Fruit Company, que anteriormente tenía su sede de operaciones en Santa Marta, cultivando banano destinado a la exportación. Proceso que a su vez le permitió incorporarse a las dinámicas económicas, sociales y políticas de carácter nacional. Con anterioridad a este momento, la región se encontraba relativamente alejada de las dinámicas nacionales, siendo la recepción de olas migratorias de población campesina desplazada por

3. Industrialización por Sustitución de Importaciones, modelo implementado en varios países suramericanos a partir del período de entreguerras.

la violencia de los años cincuenta la conexión más relevante de Urabá con el resto del país. A partir de entonces, sin embargo, las dinámicas sociales, económicas y políticas regionales cambiarán de manera radical.

Adicional a la instalación de la Frutera Sevilla, para la misma época se desarrolló en el centro de la región un cultivo de 6.000 ha de palma de aceite, por parte de la empresa colomboholandesa Coldesa, y fue finalizada la Carretera al Mar, que conectaba a Medellín, y por lo tanto al resto del departamento, con el municipio de Turbo, en las costas del golfo de Urabá. Todos estos elementos se traducían para la población de otras regiones en crecientes oportunidades de empleo y de empezar nuevos proyectos de vida. Las olas migratorias hacia Urabá, a consecuencia de lo anterior, aumentaron de manera considerable por lo menos en las siguientes dos décadas.

A partir de la década de los sesenta, el elemento dinamizador de la economía y la realidad regional será el cultivo de banano impulsado por la multinacional estadounidense. Este se convertirá en el eje de producción económica, al rededor del cual se configurará una nueva realidad regional, en términos territoriales, políticos y sociales. Sin embargo, ninguna de estas transformaciones será agenciadas por dinámicas de concertación o búsqueda de la bienestar social para la población. Por el contrario, la violencia, el robo y la sobreexplotación serán los elementos que articularán la historia regional a partir de este momento.

La configuración de la economía regional alrededor del cultivo de banano obedeció en un primer momento a una lógica violenta de disociación de la población campesina de la propiedad de las condiciones de realización de su trabajo (Marx, 1999), así como la conversión de los mismos en los factores de producción del nuevo eje de la economía regional. Tal y como fue resaltado por Marx en el célebre capítulo XXIV de *El Capital*,

[...] el proceso que engendra al capitalismo sólo puede ser uno: el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad, proceso que de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras que de otra parte convierte a los productores directos en trabajadores asalariados. (ídem, 608)

Así mismo, el proceso que configuró el nacimiento y éxito posterior de la economía bananera en Urabá estuvo fundado en la expropiación violenta de la tierra a la población campesina y su conversión forzada en trabajadores asalariados y sobreexplotados del cultivo de la fruta, a falta de opciones para garantizar su subsistencia (García, 1996:42-43).

Así, la incorporación regional a las dinámicas de acumulación de capital implicaron una reestructuración violenta de las formas de vida preexistentes. El panorama que una vez estuvo dominado por bosques naturales y pequeñas parcelas campesinas dispersas por el espacio regional, fueron convertido en cultivos de banano; se presentó un agresivo proceso de concentración de la propiedad de la tierra, y la población campesina fue proletarizada u obligada a desplazarse a la periferia regional, ampliando así la frontera agrícola.

En este sentido, este proceso que Marx denominó como acumulación originaria es un elemento explicativo central para comprender los nuevos frentes de acumulación abiertos en Urabá y las nuevas formas de acumulación que son predominantes en la actualidad en Colombia. Sin embargo, para los propósitos de este artículo, considero más conveniente retomar el concepto “acumulación por desposesión” acuñado por David Harvey, que actualiza y complementa el de “acumulación originaria”, entendiéndolo como el proceso a través del cual es posibilitada la liberalización de un conjunto de activos (incluida la fuerza de trabajo) a un costo muy bajo, cuando las dinámicas capitalistas requieren de activos que les permitan superar las presiones provenientes de la sobreacumulación. Habla de acumulación por desposesión al considerar poco adecuado denominar “originario” a un proceso que se halla vigente y se está desarrollando en la actualidad (Harvey, 2003:116), como puede ejemplificarlo el desarrollo de la realidad de Urabá durante las pasadas cinco décadas.

El cultivo de banano no fue, sin embargo, el único beneficiario de estos procesos de disociación violenta del campesinado de sus medios de vida y liberalización de activos. La ganadería terrateniente, que empezaba a imponerse en Urabá, también impulsó procesos similares de robo de tierras campesinas y expulsión violenta de la población. En cabeza tanto de ganaderos como de bananeros, la expropiación de tierras tomó dos vías de operación: la primera de ellas, de carácter violento, a través del empleo de amenazas o el uso efectivo de la fuerza, apoyadas en ocasiones por el Ejército Nacional. La segunda, de carácter podríamos llamar “formal”, involucraba el correr cercas ampliando las extensiones de las parcelas, la compra de tierras a bajos precios aprovechando el desconocimiento campesino sobre el valor y la importancia de las mismas, o la creación de compañías por parte de inversionistas extranjeros haciéndose pasar por colonos para solicitar adjudicación de tierras al Estado (García, 1996:42-43).

El divorcio de la población campesina de sus tierras tuvo como consecuencia directa la constitución de una masa de población carente de medios de vida, apta para ser proletarizada a través de su

inclusión en las tareas de producción en la nueva actividad agroindustrial. Se constituyó un “ejército de reserva” que, presionando los salarios a la baja, garantizó condiciones de acumulación favorable para los empresarios bananeros.

De hecho, como resultado de la configuración de la actividad bananera en la región, los márgenes de ganancia que podía obtener el capital nacional se restringían casi que únicamente a la plusvalía absoluta obtenida a través de la sobreexplotación obrera. La Frutera Sevilla, cuya iniciativa inauguró los cultivos de banano en la región, contrario al papel que desempeñó durante la primera mitad de siglo en Santa Marta, en Urabá no fue productora directa. Por el contrario, su labor se concentró en definir las condiciones en las que los cultivos debían desarrollarse, así como en controlar los procesos de comercialización de la fruta. Esto, por supuesto, no obedecía a razones azarosas: era en el proceso de comercialización donde se registraban los mayores índices de ganancia de todo el proceso. Así, el capital nacional, encargado del cultivo de banano, era reducido a una situación de enorme desventaja, en la que por cada dólar recibido producto de la venta de la fruta, sólo le correspondían 11 centavos (Botero, 1990:68).

Igualmente, la racionalidad económica capitalista, en la configuración de las espacialidades que construye, implica el ordenamiento del espacio geográfico de acuerdo a las necesidades de rotación de capital y sustitución constante de la mano de obra.

El tiempo de rotación del capital es igual al tiempo de producción más el tiempo de circulación. Cuanto mayor sea el tiempo de rotación de un capital dado, menos es su rendimiento anual de plusvalor [...]. Por lo mismo, cualquier reducción del tiempo de rotación aumenta la producción de excedente y fortalece el proceso de acumulación. Acelerar “la velocidad de circulación del capital” contribuye al proceso de acumulación. (Harvey, 2007:262)

En este sentido, el ordenamiento del espacio geográfico y la ubicación de los centros de producción, comercialización y de abastecimiento de materias primas deben obedecer a una lógica racional que siempre busque disminuir el tiempo de rotación de capital, como forma de aniquilar el espacio mediante el tiempo.

En Urabá, esto tuvo implicaciones concretas en la reorganización del paisaje regional. En primer lugar, los cultivos de banano, siguiendo la lógica anteriormente expuesta, fueron asentados en las zonas rurales de los municipios aledaños al golfo. Su ubicación permitía reducir tiempos y costos de transporte de las zonas de cultivo, recolección y

empaques de la fruta hacia los puertos de embarque hacia los mercados internacionales, ubicados en el Golfo.

Así, la primera consecuencia de la búsqueda de una organización racional del espacio geográfico, de acuerdo a las necesidades de la producción bananera, fue la concentración de las actividades económicas capitalistas y la concentración poblacional al rededor de ellas, lo que llevó al establecimiento de un centro regional económico, pero también geográfico⁴. Centro que, por su vocación económica, es denominado “eje bananero”.

Centro, que por supuesto, tiene como correlato la conformación de una periferia regional, en el norte y sur de Urabá, que ocupa hasta la actualidad un papel secundario frente a las actividades económicas de corte capitalista. Allí fueron relegadas las economías tradicionales campesinas y las grandes haciendas ganaderas, que concentran buena parte de la propiedad de la tierra. Ahora, si bien estas actividades son secundarias frente a los niveles de producción y tasas de acumulación de capital propios del negocio bananero, son el exterior necesario del mismo. Aunque relegadas y empobrecidas, las parcelas campesinas garantizan hasta hoy el abastecimiento de alimentos y productos necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo regional, y con el paso del tiempo, se vincularon progresivamente a la comercialización departamental e internacional de sus productos (especialmente de plátano)⁵.

En segundo lugar, “para que la producción salga adelante, el capital y la fuerza de trabajo deben reunirse en un punto particular del espacio” (Harvey, 2007:349), a lo que generalmente se responde con la creación de aglomeraciones urbanas, en este caso, municipales. En este sentido, al rededor de los cultivos agroindustriales se conformaron los principales centros municipales de la región.

4. Las zonas en donde se establecieron los cultivos de banano, así como las cabeceras municipales que concentraban mayor número de población, se ubicaban en el centro geográfico de Urabá, al rededor de las costas del golfo.

5. De las 10.000 hectáreas iniciales destinadas al cultivo de banano en 1960, se pasa en 1982 a 19.300 hectáreas; la palma africana pasa de 351 hectáreas en 1977, a 2.260 hectáreas en 1982; el arroz pasa de 1.900 hectáreas en 1977, a 6.800 hectáreas en 1982; para el plátano se destinan 5.300 hectáreas y para el caucho 2.000 hectáreas, que adquieren, de manera creciente, un perfil comercial, hasta lograr abastecer casi un 80% del mercado regional y parte importante de la demanda de Antioquia. Igualmente aumenta la cantidad de hectáreas destinadas a la ganadería, actividad casi insignificante para 1960, que sin embargo para 1970 se amplía y consolida, alcanzando 179.000 hectáreas y 362.000 hectáreas en 1981. De acuerdo a esto, la actividad ganadera alcanzó en 1983 representar el 13,3% del PIB de la región.

Sin embargo, mucho antes de la organización de cabeceras municipales, bajo la necesidad de contar con un desarrollo espacial que permitiera que la fuerza de trabajo sustituirse a diario al menor costo posible, los trabajadores bananeros fueron obligados a residir al interior de las fincas bananeras, por lo que sus refugios después de la jornada laboral se limitaba a cambuches improvisados a base de plásticos, láminas de metal y cartones. En este sentido, durante las primeras dos décadas del negocio bananero, los trabajadores fueron sometidos no sólo a largas jornadas laborales, muchas veces superiores a las 16 horas, sino que también les era prohibido dejar los cultivos, visitar a sus familias o residir en los pueblos que empezaban a conformarse (García, 1996:105).

Igualmente, los nuevos pobladores, migrantes de distintas regiones del país que llegaban a Urabá, comenzaron a levantar viviendas improvisadas en los costados de las carreteras que llevaban a las fincas bananeras. Este fue el comienzo de los primeros municipios que hoy son las cabeceras municipales del eje bananero. Este proceso, desarrollado por iniciativa de la población, no contó con el respaldo de las instituciones estatales, lo que llevó a la instauración de centros poblados que no contaban con planes de urbanización que permitieran el suministro de agua, servicios de alcantarillado y recolección de basuras, entre otros.

Para finales de la década de los sesenta, todos estos factores se traducirán en causas de fuertes tensiones sociales que obligaron a la población a organizarse y presionar a las instituciones estatales para que garantizaran condiciones mínimas de existencia. Organización popular que para la década de los ochenta, y con ayuda de las guerrillas, pondría en entredicho la continuidad de las dinámicas de acumulación de capital en Urabá, y por lo tanto, a la región como un territorio “viable” para las actividades capitalistas.

Primeras configuraciones del régimen político local

El accionar estatal en Urabá ha sido siempre precario y la escasa presencia del mismo ha estado tradicionalmente sesgada, priorizando siempre la satisfacción de necesidades de los sectores económicos dominantes (empresariado bananero y ganaderos). En este sentido, el aparato de Estado se encargó de construir algunas vías que permitieron el transporte de la fruta desde las fincas de cultivo hacia los distintos puertos de embarque ubicados en las costas del golfo. Igualmente garantizó la presencia del Ejército Nacional, buscando mantener “el orden público” a través de operaciones contrainsurgentes, encaminadas

a erradicar la presencia de las FARC y el EPL, que empezaban a asentarse en la zona. Pero también a través de seguimientos, intimidaciones, hostigamientos y hasta asesinatos a miembros de los diferentes sindicatos que empezaron a organizarse desde la década del sesenta, así como de líderes y lideresas sociales que hacían parte de movimientos de ocupación de tierras que también emergieron en esta época.

El accionar del Estado, así, posibilitó la consolidación de una espacialidad funcional a las lógicas de la producción y la acumulación de capital, reforzando también la coherencia de procesos económicos, geográficos y sociales, que se establecieron alrededor del cultivo y la comercialización de banano, actividad central en la región.

Debe anotarse que la configuración del régimen político local le era funcional a las lógicas económicas que empezaban a imperar en Urabá. Muestra de ello es que hasta bien entrada la década de los ochenta, el Partido Liberal fue el movimiento político predominante en la región, partido del que hacían parte también importantes figuras del gremio bananero, cuyo caso más conocido es Jaime Henríquez Gallo, presidente de la comercializadora de banano Uniban y de la junta directiva de Augura, el gremio bananero (Ortiz, 2007:74). Sin embargo, su primacía le era disputada por las facciones disidentes Anapo, el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y el Moir, primacía que buscaba consolidar a través de la concesión de favores personalizados, que en ocasiones lograban respaldar la construcción de una escuela, un puesto de salud o una carretera para llevar los productos campesinos de la parcela al mercado local, pero que en todo caso no buscaban resolver la situación de marginación y pobreza estructural a la que estaba sometida la población de Urabá.

En contraposición, movimientos y partidos contestatarios frente al establecimiento nacieron y se fortalecieron durante los años sesenta, especialmente durante la década del setenta. Entre ellos se encontraban el Partido Comunista, el Partido Comunista Marxista-Leninista, la Unión Nacional de Oposición (UNO), el Frente Democrático y el Frente Popular, entre otros (Corporación Reiniciar, 2006:23). Fuerzas que, contrario a los otros partidos, llevaban a cabo trabajo popular en los distintos corregimientos, apoyando la invasión de tierras, la fundación de barrios obreros y la realización de huelgas y marchas a través de las cuales se exigía al Estado mejores condiciones de vida, acceso a servicios públicos y garantías laborales, entre otras demandas.

El panorama de fuerzas políticas no queda completo sin traer a colación la presencia y trabajo de las guerrillas de las FARC y el EPL. Estas dos organizaciones llegaron a la región para la segunda mitad de esta

década y se establecieron principalmente en las zonas rurales del sur y el norte de la región. Sus estrategias de acción estaban directamente relacionadas con las colectividades políticas con las que eran cercanas. Las FARC del Partido Comunista, y el EPL del Partido Comunista-Marxista Leninista. En este sentido, combinaron el trabajo proselitista y comunitario con la acción armada.

Las FARC tuvo una presencia importante, aunque dispersa, por algunos corregimientos de la región. Acompañó desde sus inicios el fortalecimiento de comunidades y poblaciones, que carentes del apoyo del Estado, necesitaban alcanzar lo que aquel no les cubría. El EPL, por su parte, se estableció en las zonas rurales del norte de Urabá; sin embargo, producto de las violentas persecuciones del ejército, no logró consolidar su presencia hasta entrada la década de los ochenta.

La presencia y el radio de acción son importantes de resaltar debido a que los vínculos que establecieron con las poblaciones serán determinantes para el curso de los acontecimientos en las siguientes décadas. De hecho, para las FARC, y en menor medida el EPL, la construcción de bases de apoyo fue el resultado conjunto del adoctrinamiento y su actuación como “fuerzas de orden” que venían a llenar los vacíos que dejaba la ausencia del Estado. La acción política, entonces, se encontraba profundamente entremezclada con las actividades armadas, hecho que reivindicaran tanto el Ejército como los paramilitares en su discurso “antisubversivo”, en la aniquilación de las bases de apoyo por ejemplo, de la Unión Patriótica.

La lucha social y sindical: organización de los sectores populares

Pocos años después de haberse inaugurado en Urabá el cultivo de banano, las tasas de crecimiento económico de la actividad llegaron incluso a superar los ritmos de crecimiento en el nivel nacional⁶. A pesar de lo anterior, fueron precarios los niveles de reinversión social hechos por parte del empresariado bananero. La prosperidad de la actividad agroindustrial no fue impedimento para la perpetuación de estadios de desigualdad y pobreza social radicales, que tenían como correlato fuertes presiones y luchas por el acceso a la tierra, concentrada en buena parte por terratenientes y empresarios bananeros⁷, por el

6. El PIB de los cuatro municipios del eje bananero era 53% superior al promedio nacional, y para 1984, gracias a Urabá, Colombia se había convertido en el tercer exportador de banano en los mercados internacionales. DNP y Corpourabá (1984, 5-7).

7. Entre los años sesenta a ochenta, período de consolidación de estas dos actividades económicas, se presenta un agresivo proceso de concentración de la tierra, especialmente relacionado con las fincas de banano. De hecho, de 1977 a 1986, las fincas de menos de

acceso a servicios públicos de suministro de agua y alcantarillado, y por mejores condiciones de trabajo⁸.

Así, el crecimiento de la actividad bananera era directo beneficiario de las precarias condiciones de vida de los y las habitantes de la región, y más específicamente de los trabajadores de los cultivos. Debido a que ni el Estado ni el capital privado se interesaban en suplir estas carencias, fueron los mismos trabajadores(ras), campesinos(as) y pobladores(ras), que a través de la organización de sindicatos, movimientos de invasores de tierras y partidos políticos, intentaron revertir esta tendencia.

Como primer “frente de lucha” se encontraban los sindicatos, forma organizativa popular predominante en Urabá desde el inicio de la producción bananera. Su importancia será decisiva desde estos años, no por la influencia –por demás precaria– que lograran ejercer en la mediación de las relaciones obrero-patronales, sino porque desde entonces predominan como espacio para la organización social y son el lugar desde donde se dan las peleas y luchas por diferentes reivindicaciones.

A pesar de la existencia de multiplicidad de organizaciones, durante los años sesenta y setenta, los sindicatos tuvieron poca influencia en la consecución de verdaderos logros y conquistas sociales por varias razones. La primera y tal vez más importante, corresponde al antisindicalismo profundamente arraigado en la mentalidad de los empresarios bananeros, que los llevaban a la estigmatización de los trabajadores(as), despidos masivos, amenazas, reducciones de sueldo y asesinatos, entre otras acciones (Ramírez, 1997 y García, 1996). El segundo factor de debilitamiento consistía en la lucha intrasindical que se fraguó entre las distintas organizaciones, enfrentadas por la afiliación de trabajadores(as). Los constantes enfrentamientos, muchas veces llevados a la violencia, le restaron unidad y por tanto contundencia a las demandas sindicales, lo que redundó en su debilidad.

Por último, debe resaltarse el oportunismo político con el cual, en algunas ocasiones, fueron manejadas las organizaciones sindicales por parte de las diferentes fuerzas políticas que hacían presencia en la

30 hectáreas, que inicialmente representaban una tercera parte del total, para este último año alcanza solo el 13,5%. Las extensiones de más de 30 hectáreas aumentaron de 182 a 229, y las haciendas que comprendían entre 120-150 hectáreas –que presentaron el mayor crecimiento– pasaron de 6 a 22 hectáreas. García (1996, 88-89).

8. A buena parte de los municipios de Urabá, el acceso a servicios de luz eléctrica no llegó sino después de 1985, y fue después de 1988 que en la región se hizo vigente la legislación laboral que para el resto del país existía desde décadas atrás.

región, factor que terminó por debilitar la confianza de los trabajadores y de la población, quienes se veían a sí mismos como instrumentos de estas (García, 1996:115-116).

En segundo lugar, desde finales de la década de los sesenta se organizaron grupos de pobladores que, a falta de tierra disponible en la que construir sus viviendas, iniciaron campañas de invasión de lotes en desuso, propiedad de empresariados bananeros o terratenientes ganaderos. Parte de ellas fueron apoyadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), creada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo con el ánimo de impulsar un proceso de redistribución de tierras que contuviera los índices de migraciones hacia las ciudades, apaciguara el potencial de descontento rural y dinamizara la economía nacional abriendo mercados rurales y espacios para la industrialización (Bushnell, 1984:317).

A partir de estos “espacios”, a lo largo de toda la década de los setenta, se llevaron a cabo un número importante de huelgas y paros, a través de los cuales la población de diferentes municipios de la región exigía al Gobierno garantizar el acceso a servicios públicos domiciliarios básicos, entre ellos, agua, luz, alcantarillado y tierras. De igual manera, se adelantaron jornadas de invasiones de tierras, primero en la zona sur de la región y luego, en la década de los setenta, concentradas en el eje bananero.

En últimas, a lo largo de las décadas de los sesenta y setenta, Urabá se vinculó a la dinámica política y económica nacional a través de su configuración como nueva espacialidad capitalista. Esta, sin embargo, a pesar de instaurarse, no logró consolidarse, dados los fuertes antagonismos que definían la relación entre capital y trabajo y que llevaron a la movilización y radicación no solo obrera, pero de los sectores populares en general, poniendo en tela de juicio la hegemonía de las dinámicas de acumulación en la región. Esta dinámica se intensifica en el siguiente período descrito, permitiendo la organización de la población y la puesta en entredicho del orden social –desigual y excluyente– que se impuso en Urabá desde los años sesenta.

El posicionamiento de la izquierda. Espacialidad capitalista en cuestión (1980-1988)

Buena parte de los conflictos registrados en las décadas anteriores se intensificaron en los años ochenta. Los conflictos laborales, así como la presión creciente por tierra urbanizable y acceso a servicios públicos domiciliarios, se agudizan dado el creciente acompañamiento de estas luchas por parte del EPL y de las FARC.

La configuración de espacialidades capitalistas, como se dijo en

un primer momento, no solo está determinada por la incorporación territorial a las lógicas de acumulación de capital, pero también por la reconfiguración y estructuración de relaciones sociales y políticas favorables a las actividades económicas de corte capitalista, el apoyo de las instituciones y el accionar del Estado a estas lógicas y, sobre todo, la dominación del trabajo por el capital en un territorio determinado. Frente a esto, el avance de la izquierda, condensado en el acceso de distintos partidos políticos –entre ellos la Unión Patriótica y el Frente Popular– a cargos decisorios en la región, y el fortalecimiento sindical y de las organizaciones populares, representaron la puesta en entredicho de la continuidad de la hegemonía del capital en la configuración de la realidad regional, las relaciones políticas y el desarrollo de las actividades económicas.

Como se registró en el apartado anterior, tres frentes de acción populares permitieron lo anterior. El primero, las invasiones de tierras, que hicieron posible a la población acceder a tierra urbanizable apta para la construcción de vivienda, y el desarrollo de cultivos campesinos que permitieran la subsistencia de la población. Esta fue una estrategia, que si bien se llevaba a cabo en la región desde finales de los años sesenta, en los ochenta fue promovida en primer lugar por el EPL y respaldada posteriormente por las FARC. En segundo lugar, se encontraban las luchas obreras y el fortalecimiento de los sindicatos. Por último, el acceso a las instituciones del Estado por parte de fuerzas de izquierda como la Unión Patriótica y el Frente Democrático, a través de procesos de elección popular.

A lo largo de la década se desarrollaron docenas de jornadas de invasión de tierras –que muchas veces hacían parte de haciendas bananeras o ganaderas–, que terminaron en la construcción de barrios populares fundados por estas fuerzas⁹. Estos, más adelante, se convertirán en los fortines de apoyo político, social y electoral para las mismas, y por esta razón serán escenario de las distintas masacres perpetradas por grupos paramilitares.

Las organizaciones sindicales, especialmente Sintrabanano y Sintagro, débiles para comienzos de la década, contando con el respaldo de las FARC y el EPL, respectivamente, para 1984, adquieren la fuerza organizativa de la carecían y, a través del uso de la fuerza, lograron paralizar en buena medida el crecimiento de la economía bananera.

En relación con lo anterior, como mecanismos de presión al

9. Entre otros, La Chinita en Apartadó, acompañado por el PC y las FARC; Policarpa Salavarrieta, El Consejo y La Chinita por parte del PCML y el EPL.

empresariado bananero en busca de condiciones dignas de trabajo, salarios justos y mayores tasas de reinversión social de las ganancias, aumentan los actos violentos y de sabotaje en contra de las fincas y de la producción bananera entre los años 1984-1987 por parte de las organizaciones sindicales:

[...] en algunas fincas se quemaron vehículos, se cortaron los cable-vía que transportan banano, se destruyeron plantaciones, se dañaron o quemaron empacadoras o bodegas de cartón [...] se volaron torres de energía y de comunicaciones. (García, 1996:132)

Se atentó contra la vida y se asesinó a administradores de fincas bananeras, así como empleados de las plantaciones, se llevaron a cabo operaciones tortuga en la recolección y empaque de la fruta, entre otras acciones. Todo esto llevó al empresariado bananero a exiliarse de la región para finales de la década, buscando refugio de los continuos atentados en su contra.

El fortalecimiento de las organizaciones sindicales se vio reflejado también en la unificación de las acciones organizativas. Mientras que en 1983 se firmaron dos convenciones colectivas, para 1985 se presentaron 154. De esto se llegó en 1987 a un pliego unificado de peticiones, presentado por Sintrabanano y Sintagro en representación de todas las organizaciones y de más de 80 fincas bananeras. Es importante resaltar que mientras que para principios de la década solo unas cuentas docenas se trabajadores se encontraban sindicalizados, para mediados de los ochenta las organizaciones recogían a buena parte del universo de trabajadores, logrando afiliar a más de 5.000 de ellos en la zona bananera (Ramírez, 1997:75). Igualmente, respondiendo a los retos que ponía de presente el panorama nacional: creación de la CUT, creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y el nombramiento de una jefatura militar para Urabá. En 1988, los dos sindicatos más importantes se unifican, creando así a Sintrainagro.

La presión ejercida por la fortaleza y claridad de las demandas, acompañadas por las medidas de fuerza facilitadas por la guerrillas, llevó al Gobierno nacional a concertar acuerdos entre el empresariado y los sindicatos, que comprometieron al primero a garantizar la entrada en vigencia de condiciones laborales más favorables, como el salario mínimo vigente, la vinculación a través de contratos, la jornada laboral de ocho horas, garantías para el ejercicio sindical y la negociación y la construcción de vivienda para la población trabajadora.

Sin embargo, el fortalecimiento en términos organizativos se vio matizado por la dinámica perversa adquirida una vez fueron

respaldados por las FARC y el EPL. El apadrinamiento de los sindicatos por parte de las guerrillas desató una guerra intrasindical, en la que se llegaron a asesinar a docenas de sindicalistas de “un bando u otro” por la sencilla razón de pertenecer a la organización contraria, o por trabajar en la finca ubicada en el territorio controlado por uno u otro grupo armado. Esto los llevó a trasladar la lucha entre organizaciones armadas por el control del territorio de las zonas periféricas al eje bananero y, más específicamente, a las fincas bananeras, y al establecimiento de territorialidades de las FARC y el EPL, en las que cada una controlaba el funcionamiento de los sindicatos, la realización de paros laborales y los atentados contra la infraestructura de las fincas.

Como contrapartida al fortalecimiento sindical y guerrillero, las fuerzas políticas de izquierda, especialmente la Unión Patriótica, lograron controlar importantes espacios de decisión política, desde los cuales tuvieron la capacidad de impulsar políticas de apoyo a las clases subalternas de la región. La elección popular de alcaldes fue el último instrumento que permitió a los actores sociales arrebatarse el “control regional al capital”. Con la entrada en escena de la Unión Patriótica, el panorama político de Urabá cambiará de manera importante, balanceándose a favor de los movimientos de izquierda, tanto que la UP alcanzó la alcaldía de varios municipios en repetidas ocasiones, varias de las cuales de manera consecutiva¹⁰.

Todo lo anterior se tradujo en una reconfiguración del mapa regional de fuerzas y actores, en el que la izquierda, social, política y militar, se hizo con el control de buena parte de Urabá a través de bases sociales organizadas y representantes de las mismas en los cargos de elección popular. El avance de la izquierda puso en cuestión el control hegemónico, político, social y económico del empresariado bananero y de las dinámicas de producción y acumulación capitalistas. En la medida en que las acciones sindicales, los paros laborales y los sabotajes a las fincas bananeras aumentaban, administradores y dueños de las mismas optaron por autoexiliarse de la región y dejar a su suerte el desarrollo de la producción bananera. Esto representó una puesta en cuestión de la región como espacialidad capitalista y su pertinencia para garantizar altas tasas de acumulación de capital.

El empresariado bananero intentó responder a esta transformación

10. Mutatá (por sus corregimientos de Belén de Bajirá, Parvaradó y Parvaradogrande), Apartadó (por San José de Apartadó) y Turbo (por los corregimientos de Currualo, Nuevo Oriente y Nueva Colonia), zonas en las que, entre otros procesos, acompañaron la invasión de haciendas para la consecución de vivienda para los y las trabajadoras.

radical del panorama regional con la financiación de grupos paramilitares nacientes, que con la colaboración de altos mandos militares en la región, iniciaron una campaña de exterminio de sindicalistas y líderes(as) sociales y políticas¹¹. Estos grupos, gestados en el departamento de Córdoba con la colaboración especial de la facción terrateniente y ganadera en la región, eran y siguieron siendo financiados por capos del narcotráfico que tenían presencia e intereses en la zona, especialmente relacionados con la compra masiva de tierras y el lavado de activos. Esto, a pesar de que debilitó la movilización y la organización popular, no la detuvo y, en respuesta a ello, radicalizó sus acciones para la siguiente década.

Afirmación capitalista en la región: imbricación de legalidad-ilegalidad capitalista y apertura de nuevos frentes de acumulación

El avance de la izquierda, sindical, partidaria y guerrillera, representó un duro golpe para las clases tradicionales de la región. El Partido Liberal perdió su preeminencia política en las alcaldías y consejos municipales, y el fortalecimiento de un sindicalismo contestatario ciertamente representaba desventajas para el empresariado bananero. Todo lo anterior implicó la puesta en entredicho de las dinámicas de acumulación de capital en la región y, más aún, la continuidad de las actividades económicas de corte capitalista en Urabá.

Esto no derivará, sin embargo, en su derrocamiento. Por el contrario, el empresariado bananero y las clases políticas que lo respaldaban, aliadas con las nacientes estructuras paramilitares, llevarán a cabo una larga empresa de exterminio de las fuerzas políticas y sociales de izquierda en Urabá, desestructurarán el sindicalismo y aniquilarán a los representantes de la Unión Patriótica. Lo anterior permitirá que la economía bananera retome los ritmos de crecimiento que se presentaron en las décadas de los sesenta y setenta, así como la apertura de nuevos frentes de acumulación, nacidos de la imbricación orgánica de los circuitos legales e ilegales de acumulación de capital. Esto fue respaldado, y a su vez tuvo como consecuencia, la reestructuración del régimen político local, la reconfiguración del bloque de fuerzas dominantes en el poder y la cooptación del Estado por estructuras mafiosas y paramilitares, cercanas a las clases económicamente dominantes en Urabá.

11. *El Espectador*, “Castaño y Chiquita Brands”, septiembre 20 de 2009; *Verdad Abierta*, “El dinero del banano sirvió para financiar la guerra”, febrero 16 de 2010, y “Raúl Jazbún habla de los ‘paras’ y los negocios del banano y la palma”, junio 3 de 2010.

“Ahí vienen los mochacabezas”. Homogenización política, exterminio de la izquierda y flexibilización violenta del trabajo (1988-1997)

En los años noventa se presenta en Urabá la intensificación de las modalidades criminales de la lógica capitalista, que ya se habían registrado entre los años sesenta y ochenta, con el asesinato de líderes y lideresas sociales y sindicales, y el robo de tierras campesinas. Además de la explotación laboral, esta se servirá de la aniquilación física de las fuerzas políticas y organizaciones populares que se le oponen, del desplazamiento forzado y, nuevamente, del despojo de tierras, todo lo que le permitirá abrir nuevos frentes de acumulación, producto del relacionamiento orgánico de formas legales y criminales de producción de capital.

El interés de retomar el control hegemónico de la región vinculó tanto a la clase económicamente dominante en Urabá, principalmente constituida por bananeros y ganaderos, y a las cabezas de los nacientes ejércitos paramilitares, los hermanos Carlos, Vicente y Fidel Castaño, entre otros¹². Como lo demostrará el desarrollo de los acontecimientos, estos no sólo tenían incentivos contrainsurgentes para la aniquilación de la izquierda, la comisión de masacres y el desplazamiento forzado de la población. El control estratégico de territorios funcionales a los intereses del negocio de la droga, así como la concentración de la tierra, se conectaron con la necesidad empresarial de pacificar la región para permitir el desarrollo imperturbable de los cultivos de banano. Más adelante, la conexión de estos intereses derivara en una imbricación orgánica, así como dependencia mutua de las formas y frentes de acumulación legales e ilegales.

Es importante resaltar que desde la década de los noventa, en el panorama regional, serán centrales el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, dada la magnitud que adquieren estos fenómenos en Urabá. Desplazamiento forzado que fue consecuencia de los enfrentamientos armados entre las FARC y el EPL y de las FARC y grupos paramilitares, pero especialmente de la estrategia de tierra arrasada utilizada por los paramilitares en la región, que tuvo como consecuencia el abandono de miles de hectáreas de tierras. Hectáreas a las que se sumaron mayores extensiones provenientes de las propiedades robadas a la población campesina por parte de los paramilitares y que, posteriormente, como se verá más adelante, serán destinadas al desarrollo de proyectos agroindustriales con el apoyo de las instituciones del Estado.

12. *Verdad Abierta*, “El dinero del banano sirvió para financiar la guerra”, febrero 16 de 2010.

Como parte del proceso de recuperación de la región de las acciones de las fuerzas políticas, sociales y armadas de izquierda, se privilegió como estrategia la aniquilación violenta de sus miembros. Sin embargo, debe aclararse que esto no comenzó en los años noventa. Por el contrario, desde temprano en la década anterior, grupos de paramilitares en gestación comenzaron a trabajar al servicio de los empresarios bananeros asesinando a líderes(as) sociales, políticas y sindicales. La presencia paramilitar puede rastrearse desde 1985, año en que fue denunciada por Alberto Angulo, presidente de Sintrabanano, quien fue asesinado por estos grupos dos años más tarde (Ramírez, 1997:135).

Sin embargo, es 1988 en el que se intensifica la campaña de aniquilamiento político. En este año, el paramilitarismo llevó a cabo tres masacres que marcaron el inicio de una campaña de aniquilamiento sistemático de la izquierda. En las fincas de La Negra y Honduras, zona rural de Turbo, en la madrugada del 4 de marzo, fueron asesinados 20 trabajadores. Más tarde, el 11 de abril de este año, serían muertos otros 36 en la hacienda Nueva Colonia, también en Turbo, en la vereda Coquitos. Todas las fincas era de amplia influencia de la UP y del Frente Popular.

Además de la violencia ilegal, fueron utilizados también mecanismos institucionales para fortalecer la persecución de la izquierda y su desaparición del panorama regional. En este sentido, las víctimas del genocidio de la UP identificaron la existencia de un plan trazado desde el nivel nacional, que buscaba el retorno a Urabá del Partido Liberal, así como del empresariado bananero (Corporación Reiniciar, 2006).

Como parte de este plan, se llevaron a cabo diversas acciones que terminaron por exiliar del escenario político a la Unión Patriótica. En primer lugar, se declaró, desde la gobernación de Antioquia –en cabeza de Álvaro Uribe para el momento–, la jefatura militar para Urabá en 1994, lo que dejó sin funciones a los alcaldes de los municipios, cinco de ellos, pertenecientes a la UP. En segundo lugar, se llevó a cabo un montaje judicial en el que se incriminó a estos mismos alcaldes en la comisión de la masacre del barrio La Chinita, la más aterradora llevada a cabo hasta el momento en Urabá.

Sin embargo, podría decirse adicionalmente, que el Estado, a través de su complicidad y también a través de la cooperación directa, delegó al paramilitarismo la tarea de retomar para las fuerzas del establecimiento, el control de la región. De hecho, buena parte de las diversas masacres que se realizaron, desde principios de la década de los noventa hasta 1996, no fueron posibles de otra forma

que a través de la complicidad de la Policía y el Ejército Nacional¹³.

Con la aquiescencia de los cuerpos de policía, el paramilitarismo entró a la región por el norte, a través de los municipios de San Juan, San Pedro de Urabá y Arboletes. Llevaron a cabo una docena de masacres a población que acusaban de ser auxiliadora de la guerrilla, comenzaron a desplazar a los primeros pobladores y vaciaron los territorios que después serían apropiados por los comandantes paramilitares, o se anexionarían a las haciendas ganaderas existentes¹⁴. Una vez asegurado el norte, se desplazaron al centro de la región y llegaron a este municipio para 1996, donde se reunieron con los efectivos que ya tenían presencia en los municipios de esta zona.

En el centro regional, la estrategia utilizada por el paramilitarismo para exterminar a la izquierda, además de adelantar operaciones de “tierra arrasada” en la región, fue la de encarnizar el enfrentamiento de las guerrillas existentes, que desde la década anterior se habían sumido en una guerra recíproca. Para ello, llevaron a cabo asesinatos selectivos y masacres en contra de sus bases sociales, buena parte de las veces en los barrios populares que ayudaron a construir, haciendo ver como responsable a la guerrilla contraria. Activaron así el inicio de una guerra entre el EPL, las FARC y la población, con la que una vez tuvieron algún tipo de relación.

En relación con lo anterior, en 1991 se llevó a cabo la desmovilización de una parte del EPL, guerrilla asediada por los ataques de las FARC y del Ejército Nacional. Los desmovilizados hicieron tránsito hacia la vida política a través de la conformación del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, y posteriormente terminaron convirtiéndose en la fuerza política de respaldo al paramilitarismo en Urabá (Reiniciar, 2006:1009). Parte de sus miembros se vincularon a los nacientes frentes paramilitares a través de la conformación de grupos de vigilancia denominados “comandos populares”, o se integraron al “DAS rural” sirviendo como informantes al ejército y al paramilitarismo de las acciones adelantadas por líderes(as) sociales, políticos y sindicales, principalmente de la UP¹⁵.

13. Alias El Alemán declaró las inmejorables relaciones que la Policía, el Ejército Nacional y los comandantes de los batallones tenía con los jefes paramilitares y sus ejércitos. *Semana*, “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”, mayo 11 de 2009.

14. El rastro dejado a su paso fueron 130 personas fueron muertas, 122 desaparecidas y cerca de 1.307 familias desplazadas, conformadas por unos 8.500 individuos que tuvieron que abandonar sus parcelas. *El Tiempo*, mayo 23 de 1995, en Ramírez (1997, 134).

15. Muestra de la alianza trazada entre los desmovilizados del EPL y el paramilitarismo,

De la confrontación entre paramilitares, las FARC y el EPL, la consecuencia fue la comisión de docenas de masacres en contra de poblaciones que los grupos enemigos consideraban cercanos a sus antagonistas, asesinatos selectivos de líderes y lideresas sociales y políticas, el desplazamiento de más de 30 mil personas y el abandono de un número cercano a las 150 mil ha de tierra, que más adelante serían usurpadas por el paramilitarismo y sus testaferros¹⁶.

La Unión Patriótica, al perder buena parte de sus líderes en esta confrontación, se retiró de la región como fuerza política en 1996, declinando su participación en las elecciones municipales de ese año (Suárez, 2007:176). A consecuencia de ello, Esperanza, Paz y Libertad, otros partidos políticos tradicionales y nuevos de derecha tomaron el control de la administración de los municipios y, en ese sentido, de la región.

Como correlato, el paramilitarismo, a través de sus diferentes bloques y cabezas¹⁷, coparon los espacios dejados por los grupos guerrilleros expulsados de Urabá, y ha concentrado hasta la actualidad el control territorial de la misma, primero a través de los ejércitos pertenecientes a las AUC y, actualmente, a través de los nuevos grupos paramilitares, mal llamados por el Gobierno bandas emergentes.

Además de aniquilar el partido político de izquierda predominante en la región, la arremetida paramilitar y estatal también se centró en la desestructuración del sindicalismo militante y beligerante, y por esta vía la flexibilización y desregulación violenta del trabajo. Como condición necesaria para garantizar la prosperidad de la economía bananera, el trabajo debe someterse a las necesidades de la acumulación de capital y, en este sentido, reivindicaciones de tipo salarial, remuneratorio y de bienestar social resultan contraproducentes. Así, además de eliminar físicamente a los miembros de organizaciones sindicales contestatarias, el paramilitarismo impuso, bajo la amenaza de muerte, una disciplina laboral en la que a los trabajadores bananeros les era prohibido alzar reivindicaciones o solicitar mejores condiciones de trabajo¹⁸.

fue la donación de más de 1.000 hectáreas de tierra hechas por Fidel Castaño a estos, brindándoles alternativas para su sostenibilidad económica.

16. *Verdad Abierta*, “Los reclamantes de tierra y la muerte en Urabá”, consultado en marzo 27 de 2011.

17. En Urabá, dos bloques paramilitares tuvieron presencia: el Elmer Cárdenas, cuyo radio de acción se ubicaba en el norte y sur de la región, y el Bananero, con radio de acción en el centro de Urabá contaba con dos frentes: el Turbo y el Bananero.

18. *Verdad Abierta*, “El dinero del banano sirvió para financiar la guerra”, febrero 16 de 2010.

El Bloque Bananero, que hacía presencia en el centro de la región, llevó a cabo acciones militares que beneficiaron a la producción bananera, impidiendo que se realizaran paros laborales y presionando a los empleados para que trabajaran bajo amenazas. A medida que el paramilitarismo consolidó el control territorial en sus manos, los empresarios bananeros se sintieron libres para desmontar de manera progresiva medidas que garantizaban la seguridad y bienestar social de sus trabajadores, en materia de educación, salud, pensiones, pago de horas extras y jornadas dominicales¹⁹. Se asesinaron docenas de sindicalistas, hasta el punto que, de la muerte de más de 600 personas en Urabá durante la primera mitad de la década de los noventa, buena parte de ella, la aportaron las organizaciones sindicales²⁰.

Después de la segunda mitad de la década, a consecuencia de todo lo anterior, el principal sindicato de trabajadores, Sintrainagro, fue tomado por los miembros del grupo Esperanza, Paz y Libertad, por lo que las relaciones obrero patronales cambiaron la tónica de confrontación y enfrentamiento a dinámicas de conciliación y concertación entre los intereses de los trabajadores y del empresariado. Al respecto, afirma la exalcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, que el papel jugado por los grupos paramilitares, así como por el Movimiento de los Esperanzados, fue fundamental en la conversión de las fuerzas sindicales en agentes sociales prosistémicos, funcionales a las dinámicas de la acumulación y la reproducción del capital en la región. Los sindicatos dejaron de ser actores con la capacidad de presentar demandas de los trabajadores y perdieron su conciencia organizativa, siendo cooptados por los intereses del empresariado bananero²¹.

Frentes legales e ilegales de acumulación: acumulación por desposesión e intensificación de las espacialidades capitalistas

A partir de la segunda mitad de la década de los noventa, se presentan cambios importantes en la configuración del modelo económico regional. A partir de este momento se abrirán nuevos frentes de acumulación de capital, basados en prácticas violentas de despojo de tierras, desplazamiento forzado y ejercicios de dominación violenta sobre la población, como resultado de la imbricación del accionar de

19. Todo lo anterior ha sido confesado por el comandante paramilitar Ever Veloza, alias HH, uno de los jefes del bloque bananero. *Verdad Abierta*, “El dinero del banano sirvió para financiar la guerra”, febrero 16 de 2010.

20. Ídem.

21. *Indymedia*, “Entre sangre y mentiras militaristas”, febrero 22 de 2009.

agentes legales e ilegales. Los procesos de acumulación por desposesión descritos por David Harvey (2003) se convierten en la clave analítica central para la comprensión de estas transformaciones.

En efecto, la relación estrecha trazada entre el empresariado bananero y los terratenientes ganaderos, con los ejércitos paramilitares y los intereses del narcotráfico, permitió no solo incrementar los niveles de productividad del negocio bananero, sino que igualmente permitió posicionar al paramilitarismo como un actor armado contrainsurgente, pero también como agente promotor de nuevos frentes de acumulación regionales, entre ellos el narcotráfico y los cultivos de palma, transformándose así en un agente armado de la acumulación de capital (Estrada, 2008).

La creación y el funcionamiento de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir) fue el factor que permitió la consolidación de las alianzas que desde principios de la década de los noventa se habían establecido. Estas, creadas a nivel nacional por el Ministerio de Defensa, se convirtieron en la fachada legal a través de la cual se organizó el paramilitarismo en Urabá y financió su funcionamiento²². Debe advertirse que la creación de las Convivir en Urabá fue producto de la iniciativa del jefe paramilitar Raúl Hasbún, quien fuera también un importante ganadero, empresario bananero y accionista de la comercializadora Banacol.

Las Convivir, y especialmente la Convivir Papagayo, recaudaron dineros para financiar el funcionamiento del paramilitarismo. Hasbún se encargó de que cada empresa bananera y cada comercializadora en Urabá aportara a Papagayo tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Igualmente, los ganaderos aportaron 10 mil pesos por cada hectárea que fuera de su propiedad; y en todo caso, según ordenes de Vicente Castaño, todo el que viviera en Urabá tenía que pagar dinero a los paramilitares²³. Así, Banaltex (filial de Chiquita Brands, multinacional estadounidense), Banacol, Delmonte, Dole, Proban y Uniban, además de todas las emparadoras y las empresas productoras, financiaron al paramilitarismo con más de 4.600 millones de pesos²⁴.

Lo anterior le permitió al paramilitarismo consolidar su presencia a lo largo de todo el territorio de Urabá. A consecuencia de ello, el

22. *Verdad Abierta*. “El dinero del banano sirvió para financiar la guerra”, febrero 16 de 2010.

23. *Semana*, “Las confesiones de Raúl Hasbún”, octubre 15 de 2009.

24. *Verdad Abierta*, “Raúl Hasbún habla de los ‘paras’ y los negocios del banano y la palma”, junio 3 de 2010.

paramilitarismo contó con el panorama despejado para abrir nuevos frentes de acumulación de capital. El primero de ellos, el narcotráfico, y el segundo, los cultivos extensivos de agrocombustibles.

Aún a pesar de que el capital proveniente del negocio de la droga hizo presencia en Urabá desde comienzos de los años ochenta a través de la compra extensiva de tierras, será a partir de la segunda mitad de la década de los noventa que la actividad tendrá centralidad regional, al constituirse como nuevo eje de acumulación de capital. El territorio fue convertido en un corredor estratégico para el tráfico de drogas, dada la facilidad para llevarla a los mercados internacionales por el golfo de Urabá. El puerto de Turbo fue controlado por el Bloque Bananero, que hacía presencia en el centro de la región, monopolizando su uso como punto para el envío de droga al exterior, al establecer impuestos a todos los cargamentos que no fueran enviados por los paramilitares. Por órdenes de Vicente Castaño, “por cada kilo que cocaína que salía del puerto, las autodefensas debían cobrar 50 dólares”²⁵.

Ha sido tal la importancia de Urabá como punto de comercialización internacional para la droga, que una vez desmovilizados los bloques paramilitares de las AUC que tenían allí presencia, nuevos grupos paramilitares fraguaron una guerra entre ellos por el control territorial de la región que les permitiera el control del punto de embarque internacional²⁶. A consecuencia de esto, han sido asesinados nueve líderes y lideresas que han luchado por la restitución de las tierras que le fueron robadas al campesinado en la región, y se han generado nuevos desplazamientos forzados.

De otra parte, el segundo frente de acumulación abierto por la imbricación de los circuitos legales e ilegales de acumulación está directamente relacionado con lo que hoy se conoce como el despojo de tierras a la población campesina y lo que Harvey (2007) ha conceptualizado como acumulación por desposesión. La llegada y consolidación del paramilitarismo no solo estuvo relacionado con una empresa contrainsurgente. Su presencia está también relacionada con los intereses que estos tenían sobre los territorios y, más específicamente, sobre la vocación productiva de los mismos.

De Urabá fueron desplazados más de 20 mil campesinos, y estos fueron obligados o bien a abandonar sus tierras, o a venderlas forzosamente a precios muy inferiores al valor real de las mismas. Bajo la

25. *Semana*, “Las confesiones de Raúl Hazbún”, octubre 15 de 2009.

26. Entre estos grupos se encuentran las águilas Negras, Héroes de Castaño, Los Paisas, Los Rastros, Los Urabeños y la Oficina de Envigado.

presión de las armas, la comisión de masacres y asesinatos, o el famoso lema “o vende, o le compro a la viuda”²⁷, los distintos comandantes en Urabá lograron concentrar para el aparato paramilitar más de 150 mil ha de tierra, que en la actualidad están avocadas a la ganadería extensiva, las fincas de recreo o los cultivos de palma.

Los métodos utilizados para despojar a campesinos, aunque de índole diversa, paradójicamente, no son lejanos a aquellos utilizados por bananeros y ganaderos en la década de los sesenta. El más frecuente de ellos fue, por supuesto, el uso de la violencia o la amenaza de hacerlo para que se abandonaran las tierras, o para que fueran vendidas a bajos precios; y ligado con esto, el desplazamiento forzoso de poblaciones enteras que por miedo abandonaron sus parcelas. Después de contar con los territorios vaciados, se procedía a la ocupación de facto o a la falsificación de los títulos de propiedad en caso de no haberse conseguido transar con el campesino²⁸. Propiedades que hasta la actualidad están abocadas al desarrollo de cultivos de palma por parte de antiguos paramilitares o de testaferros de los mismos²⁹.

La implementación de cultivos de palma en Urabá se enmarca dentro de la estrategia más global, adelantada desde el Gobierno nacional, de convertir Colombia en país exportador de biocombustibles hacia las economías de Europa y Estados Unidos, y ha estado directamente agenciada por el paramilitarismo en la zona, bien como productor directo o como prestador de servicios de seguridad a las tierras donde se asientan. Adicionalmente, ha sido el resultado de una estrategia de acumulación por desposesión, en tanto los terrenos que los que se asientan fueron despojados de la población campesina, a través de la violencia, el asesinato y el desplazamiento forzado, y gracias a ello liberados a bajo costo, para después ser avocados a fines económicos “provechosos”.

El restablecimiento de la producción bananera, la llegada del narcotráfico a la zona, así como los cultivos de palma, y las alianzas estrechas de cada una de estas actividades con los ejércitos paramilitares, permitieron no solo garantizar que las lógicas de acumulación de capital pervivieran en la región después de ser amenazadas por la avanzada de las izquierdas política, social y armada³⁰, sino también la intensificación del carácter capitalista de la configuración regional, al

27. Generalmente se hablaba con los hombres que hacían parte de los núcleos familiares.

28. *Semana*, “Las tierras perdidas en Colombia”, de septiembre 2 de 2008, y “Los están matando”, marzo 14 de 2009.

29. *Verdad Abierta*, “La telaraña de los paras en Urabá”, junio 14 de 2011.

30. Sí cabe hacer esta distinción, especialmente teniendo en cuenta que cada una de ellas están imbuidas de las otras.

establecer en su interior nuevas actividades volcadas a la acumulación de capital, centrales en el panorama nacional.

*Desmovilización y consolidación del paramilitarismo
como agente económico de acumulación*

En 2003, una vez consolidado el orden paramilitar no sólo en Urabá, pero también en buena parte del país, el Gobierno nacional comienza a hablar de la posibilidad de llevar a cabo la desmovilización de sus ejércitos. Las expectativas generadas por esta promesa le hicieron creer a la población que los regímenes de terror implantados con el paramilitarismo cesarían, acabaría el desplazamiento forzado, la población campesina podría recuperar sus tierras y las víctimas serían finalmente reparadas. Sin embargo, a seis años de haber finalizado los procesos de desmovilización, estos no dejan más que decepciones y desencantos y mucho de un peligroso continuismo del paramilitarismo, en cabeza de las llamadas eufemísticamente bandas criminales³¹.

Lo que representó para Urabá la desmovilización del paramilitarismo no fue la desaparición del mismo, sino la consolidación del orden territorial, económico y social que habían impuesto, y la reaparición de nuevas bandas paramilitares encargadas de preservarlo bajo el nombre de bandas emergentes o criminales. Este proceso, a la vez que permitió aparentar la desestructuración del paramilitarismo, abrió oportunidades para impulsar los cultivos extensivos de palma de aceite, cacao y caucho, y la explotación forestal intensiva, a la vez reforzar las dinámicas de acumulación de capital en la región.

En el marco de lo anterior, a los paramilitares desmovilizados les fueron adjudicados proyectos agroindustriales (especialmente de palma, caucho y madera) sobre las tierras despojadas a la población campesina desde mediados de la década de los noventa, que fueron financiados con fondos de cooperación internacional administrados por la Agencia Presidencial para la Acción Social, dineros del Plan Colombia aportados por la agencia USAID, las alcaldías de Necoclí y Turbo, la Corporación Ambiental de Urabá (Corpourabá), el SENA, la OIM, el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Antioquia y la Universidad Autónoma de Manizales, entre otras instituciones³². Para ello fueron creadas dos

31. Términos, que al utilizarlos, parecieran generar la ilusión de que estos nuevos grupos no tienen nada que ver con el viejo paramilitarismo y que, por el contrario, son bandas de delincuentes comunes.

32. Ver: Tenthoff (2008) y *Verdad Abierta*, “La telaraña de los paras en Urabá”, junio 14 de 2011.

figuras: los PASO, Proyectos de Alternatividad Social, y las Familias Guardabosques (Thentoff, 2008:10), proyectos que eran gestionados y administrados por la organización no gubernamental Asocomún, creada por el hermano de El Alemán, John Jairo Rendón Herrera, alias Germán Monsalve, hoy procesado en Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo³³.

Muestra de ello es que los cultivos de palma promovidos por estos programas se instalaron en Urabá en la zona de Tulapa, que comprende aproximadamente 32 veredas de municipios propios del norte Urabá, en especial de Necoclí, área que ha sido identificada por los campesinos de la región como uno de los sitios en los que tomó lugar el despojo en cabeza de los paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, quienes se apropiaron de manera ilegal de aproximadamente 17 mil ha en Turbo y 2.640 en Necoclí³⁴.

Según denuncias hechas por organizaciones defensoras de derechos humanos

[...] muchas de las organizaciones, asociaciones y cooperativas que han sido creadas o vinculadas al Programa Familias Guardabosques en el Urabá tienen vínculos directos con el paramilitarismo. Entre éstas, Cordesvida, Corporación Tierra Prometida, Asocomun, [...]. (Tenthoff, 2008:11)

Al garantizar a los miembros del paramilitarismo la dominación en Urabá de uno de los frentes de producción económica más importante de la región y del país en general, como lo es el cultivo de palma y la producción de agrocombustibles, lo que se ha impulsado desde el Estado colombiano es consolidación territorial y económica de este orden paraestatal, una vez sus miembros “abandonaron las armas”, sobre la base de la desposesión de tal vez más de 20.000 campesinos y el asesinato de docenas de sindicalistas y simpatizantes de un importante sector de la izquierda colombiana. Se ha dado paso por esta vía a la transformación del paramilitarismo de un agente armado, en un agente económico, político y social.

Reconfiguración del régimen político local. Extraña ausencia de la izquierda

La configuración de regional bajo las lógicas capitalistas, como se dijo antes, no sólo implica el reordenamiento geográfico y de la estructura económica de acuerdo a las lógicas de producción y acumulación. Esto

33. *Verdad Abierta*, “La telaraña de los paras en Urabá”, junio 14 de 2011.

34. ídem, p. 3.

tiene como correlato la recomposición de las fuerzas sociales y políticas, así como la adaptación, de acuerdo a sus necesidades, de las instituciones del Estado local. El control territorial hegemónico conseguido por el paramilitarismo le permitió a este controlar las configuraciones del régimen político local, así como el funcionamiento de las instituciones y de los supuestos “procedimientos democráticos en la región”.

La aniquilación de la izquierda en Urabá tuvo como necesario correlato la transformación del panorama político regional y, también, la reconfiguración del bloque de fuerzas dominante “en el poder”. De la primacía de los partidos de izquierda en la década de los ochenta y principios de los años noventa, el panorama pasó a estar dominado por los partidos políticos tradicionales. Después de que la UP anunció su retiro de Urabá, el control de los cargos de elección popular así como las instancias de poder institucional retornaron a manos del Partido Liberal o recayeron en Esperanza, Paz y Libertad –el partido aliado del paramilitarismo– y, posteriormente, para el año 2000, en diferentes colectividades políticas de carácter conservador y uribista³⁵. La presencia de la izquierda en Urabá era importante y reconocida desde la década de los sesenta; sin embargo, las fuerzas políticas y sociales predominantes de la región a partir de 1997 serán otras.

De acuerdo a lo anterior, se presentó un proceso de cooptación del Estado y las instituciones locales por parte de la mafia y el paramilitarismo. Esto, en parte, fue favorecido por la creación del movimiento político Urabá Grande, Unido y en Paz, por parte de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, comandante del Bloque paramilitar Elmer Cárdenas. Este fue fundado con funcionarios municipales de diferentes pueblos de Urabá y algunos alcaldes para el momento³⁶. A través de él lograron canalizarse al menos 2.000 millones de pesos para apoyar diferentes candidaturas políticas en el nivel local, departamental y nacional en Córdoba, Antioquia y Chocó. Además de posicionar escaños en la Asamblea Departamental de Antioquia, llevó a cuatro personas a ocupar una silla en el Congreso de la República³⁷; curul que

35. Movimiento Moral (liderado por Mario Uribe), Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, Convergencia Ciudadana y Urabá Grande, Unido y en Paz (apoyado por el Bloque Élmér Cárdenas de las AUC).

36. Manuel Darío Ávila, Jesús Enrique Doval, Estanislao Ortiz (hoy, alcalde de Turbo), César Andrade, Édison Yáñez Tirado (Necoclí), Gustavo Gómez Guerra (Arboletes) y Hugo Caballero Ballesteros (San Pedro de Urabá). *El Tiempo*, “Cuatro alcaldes de Urabá firmaron pacto con las AUC, asegura testigo de parapolítica”, mayo 23 de 2008.

37. Darío Ávila, Jesús Enrique Doval, Estanislao Ortiz y César Andrade. Estas cuatro

fue alcanzada a través del aval que le dio Cambio Radical al partido político de Urabá, a través de las listas del excongresista –hoy preso por parapolítica– Rubén Darío Quintero. Para 2007, según investigaciones adelantadas por la Fiscalía, cinco de las once alcaldías de los municipios que conforman la región de Urabá fueron alcanzadas por movimientos conservadores y otros que tenían relaciones con el paramilitarismo³⁸.

Este proceso estuvo apoyado en la formación de cuadros políticos del paramilitarismo, a través de escuelas de formación para Promotores de Desarrollo Social (PDS)³⁹, que se encargaban de formar, presidir y dinamizar Juntas de Acción Comunal y Veedurías Ciudadanas, y de relacionar “la parte político-social, concejales, alcaldes y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, con la comandancia del Bloque”⁴⁰. Así, las Juntas de Acción Comunal se convirtieron en incubadoras de políticos, quienes trabajaban con el aval y el permiso del Bloque Élmer Cárdenas. De igual manera, estas instancias fueron utilizadas por el paramilitarismo como “reservas de peso electoral”, dado que, según declaraciones de El Alemán, en cada uno de los corregimientos de los municipios de Urabá se realizaron asambleas con el fin de escoger los candidatos por corregimiento al Consejo Municipal. A consecuencia de lo anterior, todos los procesos electorales en la región, a partir de 2001, debieron contar con el aval y apoyo de este comandante paramilitar para prosperar⁴¹.

Así, las elecciones locales eran manipuladas por él mismo, obligando a la población a votar por los políticos que de momento contaran con su apoyo. Fue así que tanto Rubén Darío Quintero, como el Movimiento Renovación Acción Laboral (Moral), fundado por Mario Uribe –primo del expresidente Álvaro Uribe, hoy condenado por parapolítica–, consiguieron altos índices de votación para 2002 y 2006 en Urabá, aún cuando allí no adelantaron trabajo político o fuera su región de procedencia. El copamiento territorial, sumado a la infiltración del paramilitarismo y la mafia en el Estado local, permitieron la configuración de un estadio de dominación social, resultado de la dominación económica y social, y el sometimiento violento de la población de Urabá.

Pero no sólo las instituciones y cargos de elección popular fueron

personas se rotaron en el cargo de representante a la Cámara durante los cuatro años de su período 2002-2006.

38. *El Tiempo*, “Casi la mitad de Urabá en manos de partidos cuestionados por parapolítica”, octubre 31 de 2007.

39. *Verdad Abierta*, “La telaraña de los paras en Urabá”, junio 14 de 2011.

40. Ídem.

41. Ídem.

infiltrados por los intereses del paramilitarismo. Las notarias y oficinas de registro, así como las oficinas locales del Incoder, los comandos de la Policía Nacional y la Brigada XVII del Ejército Nacional, se pusieron a servicio de los intereses del capital agroindustrial al permitir la titulación fraudulenta de tierras a favor de empresarios de palma o testaferros del paramilitarismo –muchas veces los mismos–, sus acciones sin perseguir a los responsables y hacer caso omiso de las denuncias levantadas por la población que estaba siendo víctima de estas acciones⁴².

Las configuraciones regionales, territoriales y económicas en Urabá tuvieron su correlato en el orden nacional. Diferentes oficinas del Gobierno nacional impulsaron y apoyaron el fortalecimiento de los cultivos extensivos de palma y, en esta medida, la configuración de nuevas formas de acumulación de capital basadas en la promoción de la agroindustria para la producción de biocombustibles.

En materia económica, el Ministerio de Agricultura gestionó la creación de créditos que cubrían los gastos de implementación de los cultivos. El Banco Agrario y Finagro fueron los dos grandes actores en este sentido. Se destinaron, desde el Ministerio de Agricultura, seis mil millones de pesos en incentivos no reembolsables, y 20 mil millones más vía crédito blando a través del programa Agro Ingreso Seguro, todo encaminado a la instalación de 9.200 nuevas ha en cultivos de palma. Cifras similares, que ascienden a los 100 mil millones, se destinados a dos proyectos de producción de etanol, la construcción de una planta extractora de palma de aceite y el adelanto de proyectos de investigación que permitan mejorar los índices de productividad del etanol y el agrodiesel que se producen en Colombia (Álvarez, 2007:28).

Se construyó también, por parte del Gobierno nacional, un Estatuto de Desarrollo Rural, declarado inconstitucional, el cual pretendía ser el marco jurídico a través del cual se legalizará el despojo de tierras en Colombia en tanto que: 1) abría la posibilidad de legalizar tierras ocupadas y trabajadas durante cinco años, creyendo que de buena fe eran baldías⁴³; y 2) los terrenos baldíos sólo serían adjudicables a “empresas especializadas del sector agropecuario que tuvieran la capacidad de incorporar a sus actividades sistemas modernos de producción” (que

42. ídem.

43. Las olas de desplazamiento forzado masivo se presentan en Colombia desde finales de la década de los ochenta, momento en el cual la población campesina debió abandonar sus tierras dejándolas aptas para la apropiación ilegal por empresarios terratenientes y paramilitares, que hasta la actualidad pueden ocuparlas.

requieren altas tasas de inversión). Se entiende, en este sentido, que el pequeño campesino o campesina quedan inmediatamente excluidos de los beneficios de la adjudicación.

Estas disposiciones, más otro conjunto de normas, decretos, disposiciones y proyectos, recondujeron el entramado institucional de Estado hacia la construcción de un modelo agrícola volcado al mercado internacional, que sin embargo tiene efectos perversos y desbastadores para el medio ambiente, y las formas de producción y de vida sustentables y destinadas a la subsistencia, y no la acumulación.

Nuevo paramilitarismo y status quo

Los procesos de desmovilización paramilitar no tuvieron mayores efectos en Urabá. La desaparición de las antiguas estructuras de las AUC fue seguida por el rearme de sus exmiembros y la cooptación de otros nuevos bajo la forma de grupos narcoparamilitares (Posso, 2010). Su presencia y persistencia en el territorio regional está íntimamente relacionada con los intereses sobre el negocio de la droga. Para la actualidad, Urabá es uno de los puntos clave en la geografía nacional para el embarque de droga a los mercados internacionales.

En este sentido, el narcotráfico ha llegado a configurar las nuevas dinámicas de conflicto, en tanto explica en buena medida la pervivencia de estos grupos en la región y, por tanto, los mecanismos de control poblacional, social, político y territorial por parte de ellos en Urabá. Igualmente, es el factor explicativo para la guerra que se ha trazado entre diversas bandas narcoparamilitares, entre ellas, Los Urabeños o Los de Urabá, Los Rastrojos, Águilas Negras, Héroe de Castaño, Los Paisas y la Oficina de Envigado⁴⁴. Si bien el control territorial está en manos de la banda del jefe paramilitar Don Mario, hermano del exjefe paramilitar El Alemán, este privilegio le es disputado de manera incesante por los restantes grupos.

Ahora, la presencia de estos nuevos narcoparamilitares⁴⁵ en Urabá no se reduce al control de las rutas del tráfico de drogas. Por el contrario, al igual que las antiguas estructuras paramilitares, están orgánicamente relacionadas con la protección de los cultivos de palma, el control a manos de testaferros del paramilitarismo de las tierras que

44. Indepaz (2010). No se han utilizado los datos de la Policía Nacional, debido a que este, primero, le da el carácter solamente de criminal a estas bandas y, segundo, no reconocen la existencia de las Águilas Negras o de la Oficina de Envigado.

45. Término acuñado por la ONG Indepaz, que resalta el carácter de nuevos empresarios de la droga, de estos nuevos grupos paramilitares. Puede consultarse en Indepaz (2010).

les fueron robadas a la población campesina y el mantenimiento de un panorama político homogéneo, libre de fuerzas políticas de izquierda, u organizaciones populares contestatarias.

Miembros de estos diversos grupos paramilitares han utilizado la intimidación, el hostigamiento y el asesinato de líderes y lideresas sociales que lideran la lucha por la recuperación de sus tierras, como arma para mantener el status quo, como lo dije, asentado en el robo de tierras, en favor de los grandes terratenientes, ganaderos y palmicultores. En efecto, en los últimos años, docenas de líderes y lideresas han sido víctimas de ataques e intentos de homicidios y han sido asesinados siete de ellos, el último de los cuales, Hernando Pérez, fue asesinado horas después de que el ministro de Agricultura oficiara en Turbo un procedimiento de devolución de tierras a 34 familias despojadas por el paramilitarismo. Tras los homicidios y las amenazas, docenas de familias que habían regresado a Urabá buscando recuperar sus tierras han debido salir nuevamente de la región como desplazadas o buscando refugio para salvar sus vidas.

Sin duda alguna, que las tierras no sean devueltas es conveniente para el sector terrateniente de la región, compuesto por los ganaderos, los palmeros y los empresarios de la droga, y así lo ha denunciado la población en diversos municipios de Urabá. Carmen Palencia, dirigente de la organización de víctimas Asovirestibi, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a cinco testaferros del paramilitarismo en la zona que, según ella, financian a los grupos paramilitares para que persigan, amenacen y asesinen a las personas que intenten recuperar sus tierras.

De lo anterior puede deducirse la centralidad de la acción paramilitar en la configuración de los distintos frentes de acumulación regionales. En efecto, la configuración de la espacialidad capitalista en las pasadas dos décadas ha tenido asiento en prácticas criminales y en la consolidación paramilitar, lo que sin lugar a dudas le asigna un carácter criminal al modelo económico regional.

Conclusiones

Este escrito, más que construir un relato sobre la evolución de la realidad regional de Urabá, pretendía dilucidar los mecanismos que permitieron el desarrollo de la economía y la configuración regional bajo las lógicas de acumulación de capital, estudiando las consecuencias necesarias en los ámbitos social, político y de conflicto.

Por un lado, puede concluirse que desde la década de los sesenta, las actividades de producción de capital han estado atravesadas por mecanismos violentos de consolidación que no han variado hasta la

actualidad. Las altas tasas de sobreexplotación laboral impuestas a los trabajadores de los cultivos de banano, el despojo de tierras de la población campesina que permitió ampliar las extensiones de tierra dedicadas a los cultivos y la expansión de la ganadería y el acorralamiento del sindicalismo, son sólo algunos de los que fueron señalados.

Mecanismos que a su vez provocaron e intensificaron las dinámicas del conflicto armado en la región. La necesidad de construir un sindicalismo fuerte, que permitiera la consolidación de un sujeto colectivo fortalecido que hiciera contrapeso a las injustas y opresoras condiciones laborales a las que eran sometidas los trabajadores bananeros, llevó a que la violencia fuera el mecanismo de presión privilegiado. A la vez que causó la caída en la tasa de ganancia para el negocio del banano, muchos de los dueños de los cultivos debieron salir de la región para protegerse de las olas de violencia creciente.

A su vez, la llegada y consolidación del paramilitarismo en la región sirvió efectivamente para promover nuevos ciclos de prosperidad en las dinámicas de acumulación: el sindicalismo beligerante fue desestructurado a través de masacres, asesinatos selectivos y persecuciones, y nuevos frentes de acumulación fueron abiertos: el cultivo de palma y el tráfico de drogas.

Los procesos de desposesión, robo de tierras, expulsión violenta del campesinado, privatización de los medios de vida y de producción, violencia y acumulación por desposesión le han sido funcionales a los procesos de producción capitalista asentados en la región, en la década de los sesenta y en la actualidad, y a la configuración y consolidación de Urabá como espacialidad capitalista. Tanto los cultivos de banano, como los cultivos de palma, están asentados en los que antes fueron parcelas campesina dedicadas a la economía de subsistencia y los cultivos de pancoger. Los corredores para el transporte de droga que se dirige al golfo de Urabá se han consolidado a través de dinámicas de violencia extrema en la región, en donde se ha reducido a la población a estados de represión y control absoluto por parte de nuevas bandas paramilitares.

Así, las dinámicas de producción y reproducción de capital, y el desarrollo de un modelo económico agroindustrial en Urabá están directamente relacionados con la situación humanitaria de la población de la región. El cultivo de banano y de palma, y la consolidación de Urabá como zona estratégica para el transporte de droga hacia el exterior, todo respaldado por el viejo y el nuevo paramilitarismo, han provocado o auspiciado directa o indirectamente el desplazamiento forzado de más de 20 mil personas y el abandono de un número mayor de ha de tierra. En los años sesenta, los campesinos desposeídos de sus tierras, y por

esta vía, de los medios para garantizar su subsistencia, si no migraron a las zonas marginales de la región ampliando así la frontera agrícola, se convirtieron en trabajadores sobreexplotados de los cultivos de banano. En la actualidad, la población desplazada se ve obligada a migrar a otros pueblos o ciudades, alimentando los cordones de miseria de los mismos, con la opción de trabajar en la informalidad o mendigar por dinero para subsistir.

Por último, la consolidación de las actividades anteriormente mencionadas condujo a una configuración territorial particular que respondía a las necesidades de las dinámicas capitalistas de producción. El centro regional, económico, financiero y poblacional fue delimitado por el cultivo de fruta y los grandes latifundistas inauguraron el sur, y principalmente el norte de la región, como las zonas aptas para el desarrollo de la ganadería. Progresivamente, lo que para la década de los sesenta fueron pantanos y bosques, se convirtieron en espacios para la producción agroindustrial y los cultivos comerciales; en últimas, espacios aptos y transformados por las dinámicas de acumulación de capital en el campo.

La reorganización de la geografía regional, impulsada por los cultivos de banano y palma de aceite, y las grandes haciendas dedicadas a la ganadería, sin embargo, no solo implicaron la creación de núcleos o centros para la actividad económica. Como consecuencia de ello, alrededor de las fincas bananeras se fueron creando progresivamente centros poblados, que más adelante serían las grandes cabeceras municipales de la región: Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

La consolidación regional como espacialidad capitalista, a través de los métodos violentos conceptualizados como de acumulación por desposesión, y así, a través de la expansión y consolidación del paramilitarismo, contaron siempre con el papel activo y la complacencia Estado. El sesgo militarista bajo el cual hizo presencia en Urabá, así como la complicidad de las oficinas de registro, notarias, cuerpos de policía y ejército con las dinámicas de desposesión y expulsión del campesinado en el nivel local y la redacción de estatutos legales que promovían el despojo de tierras y la afirmación de un modelo agroindustrial basado en la producción de agrocombustibles como correlato nacional, fueron los mecanismos a través de los cuales el Estado promovió y garantizó las lógicas de acumulación de capital, no sólo en Urabá, pero también en distintas regiones del país.

Bibliografía

- Álvarez R., Paula. “La política del gobierno colombiano en la promoción de agrocombustibles”, en *Revista Semillas*, nº 34-35, Bogotá, 2007.
- Bello, Martha Nubia. “El desplazamiento forzado en Colombia. Acumulación de capital y exclusión social”, en *Desplazamiento forzado, dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo*, Bogotá, UNHCR, Acnur y Universidad Nacional de Colombia, 2005.
- Botero, Fernando. *Urabá. Colonización, violencia y crisis de Estado*, Medellín, Universidad de Antioquia, 1990.
- Bushnell, David. *Colombia. Una nación a pesar de sí misma*, Bogotá, Planeta, 1984.
- Castillo, Alfonso. “El desplazamiento como fenómeno socioeconómico ligado a la concentración del poder sobre la tierra”, en *El desplazamiento forzado en Colombia. Acumulación de capital y exclusión social*, Bogotá, UNHCR, Acnur y Universidad Nacional de Colombia, 2005.
- Cinep y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. *Urabá. El destino de la frontera. Urabá en los 90*, Comisión Verificadora de los Actos Violentos de Urabá, 1995.
- Comisión Colombiana de Juristas. *La tramoya. Derechos humanos y palma aceitera en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamandó*, 2005.
- Revertir el destierro forzado: protección y restitución de los territorios usurpados. Obstáculos y desafíos para garantizar el derecho al patrimonio de la población desplazada en Colombia*, Bogotá, 2006.
- Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. *Proyecto Mande Norte. No a la exploración y explotación minera en el cerro Careperro. Consulta de los Pueblos, Pueblo Embera Oibida*, 2008.
- Corporación Arcoíris. *La memoria de las víctimas II. Chocó: por los hijos y la tierra despojada (Curvarado, 1996-2002)*, Bogotá, 2007.
- Corporación Reiniciar. *Historia de un genocidio. El exterminio de la Unión Patriótica en Urabá. El plan retorno*, Bogotá, 2006.
- DNP y Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia. *Plan Estratégico para la Región de Urabá-Darién*, 2006.
- DNP y Corpourabá. *Plan de desarrollo de Urabá. Diversificación y bienestar hacia la industrialización*, Medellín, 1984.
- El Espectador*, “Castaño y Chiquita Brands”, septiembre 20 de 2009.
- El Tiempo*. “Casi la mitad de Urabá en manos de partidos cuestionados por parapolítica”, octubre 31 de 2007.
- “Cuatro alcaldes de Urabá firmaron pacto con las AUC, asegura testigo de parapolítica”, mayo 23 de 2008.
- Estrada, Jairo. *Capitalismo criminal: tendencias de acumulación y consolidación del régimen político*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2008.
- García, Clara Inés. *Urabá. Región, actores y conflicto*, Medellín, Cerec, 1996.
- Harvey, David. “La acumulación por desposesión”, en *El nuevo imperialismo*, Madrid, Akal, 2003.

- “La geografía de la acumulación capitalista: reconstrucción de la teoría marciana”, en *Espacios del capital. Hacia una geografía crítica*, Madrid, Akal, 2007.
- Indepaz. Cuarto informe sobre grupos narcoparamilitares, primer semestre de 2010.
- Indymedia. “Entre sangre y mentiras militaristas”, entrevista a Gloria Cuartas por Dick Emanuelsson, febrero 22 de 2009. Puede consultarse en: <http://colombia.indymedia.org/news/2009/02/98961.php>.
- Madariaga, Patricia. *Matan y matan, y uno sigue aquí. Control paramilitar y vida cotidiana en un pueblo de Urabá*, Bogotá, Universidad de los Andes, 2006.
- Marx, Karl. “La llamada acumulación originaria”, en *El capital*, vol. I, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 607-649.
- Montaña Gómez, Gustavo, y Ovidio Delgado Mahecha. “Espacios, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional”, en *Cuadernos de Geografía*, n° 1-2, Universidad Nacional de Colombia, 1998.
- Ortiz, Óscar Miguel. *Urabá: pulsiones de vida y desafíos de muerte*, Bogotá, La Carreta, 2007.
- Posso González, Camilo. *Narcoparamilitares o neoparamilitares*, Bogotá, Indepaz, 2010.
- Ramírez Tobón, William. *Urabá. Los inciertos confines de una crisis*, Bogotá, Planeta, 1997.
- Reyes, Alejandro. “Compra de tierras por narcotraficantes”, en *Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social*, Bogotá, PNUD, Dirección Nacional de Estupefacientes, Arien Ciencia Política, 1997, pp. 329-330.
- Reyes, Alejandro. *Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia*, Bogotá, Norma, 2009.
- Semana*. “En pie de guerra”, abril 9 de 2008.
- “Las tierras perdidas en Colombia”, de septiembre 2 de 2008.
- “Los usurpados del Chocó”, marzo 14 de 2009.
- “Los están matando”, marzo 14 de 2009.
- “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”, entrevista a Freddy Rendón, alias El Alemán, mayo 11 de 2009.
- “Las confesiones de Raúl Hazbún”, octubre 15 de 2009.
- “Suspenden entrega de tierras en Chocó”, mayo 18 de 2010.
- Smith, Neil. *La producción de la naturaleza, la producción del espacio*, México, Facultad de Filosofía y Letras, Unam, 2006.
- Suárez, Andrés Fernando. *Identidades políticas y exterminio recíproco. Masacres y guerra en Urabá*, Medellín, Iepri, Universidad Nacional y La Carreta, 2007.
- Tenthoff, Moritz. “El Urabá: donde el desarrollo alternativo se confunde con intereses económicos y la reinserción del paramilitarismo”, 2008.
- Verdad Abierta*. “Rubén Darío Quintero nos dio el aval para lanzarnos al Congreso: ‘El Alemán’”, septiembre 7 de 2009.

- “Testaferros de Castaño son dueños de 200 predios en Urabá”, diciembre 21 de 2009.
- “Doce paramilitares fueron guías del ejército en la Operación Génesis: ‘El Alemán’”, enero 15 de 2010.
- “El dinero del banano sirvió para financiar la guerra”, febrero 16 de 2010.
- “Capturan a 25 políticos del Urabá por presuntos nexos con ‘El Alemán’”, marzo 12 de 2010.
- “Fiscalía ordena capturar 24 empresarios de la palma por desplazamiento forzado en Chocó”, mayo 19 de 2010.
- “La muerte persigue a los que reclaman sus tierras”, mayo 25 de 2010.
- “Raúl Jazbún habla de los ‘paras’ y los negocios del banano y la palma”. junio 3 de 2010.
- “Los reclamantes de tierras y la muerte en Urabá”, marzo 27 de 2011
- “La telaraña de los paras en Urabá”, junio 14 de 2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 20 DE MARZO DE 2011
FECHA DE APROBACIÓN: 25 DE FEBRERO DE 2012